



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA
DESPACHO

Expediente: 2020-00157

Tunja, veinte (20) de noviembre de dos mil veinte (2020).

MEDIO DE CONTROL: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES
COLECTIVOS
DEMANDANTE: YESID FIGUEROA GARCÍA
DEMANDADO: MUNICIPIO DE TUNJA
RADICACIÓN: 150013333009**20200015700**

Objeto de decisión

Procede el despacho a resolver sobre la admisión de la demanda de la referencia presentada en el ejercicio del *MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS* (acción popular), previsto en el artículo 88¹ de la Constitución Política, en la Ley 472 de 1998² y en el artículo 144³ del C.P.A.C.A., por la presunta vulneración los derechos colectivos al goce del espacio público, su utilización y defensa, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y al patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de la nación; con ocasión de la problemática que se presenta en relación con el estado del Teatro Cultural ubicado en la Carrera 10, entre carreras 16 y 17 del Centro Histórico de la Ciudad de Tunja.

Las pretensiones concretas son:

- “1. Ordene al Representante Legal del Municipio de Tunja o quien haga sus veces para que dentro de un término preciso ejecute el diseño de un proyecto estructural de mantenimiento, adecuación, remodelación y reactivación de escenario Teatro Cultural de Tunja a través del cual se superen la totalidad de los deterioros, falta de mantenimiento y daños que ostenta en pisos, paredes, baños, escenarios culturales, espacios administrativos, pasillos, silletería, techos, sistemas de iluminación, camerinos, telón de seguridad, escaleras, entre otros que padece el bien.*
- 2. Ordene al Representante Legal del Municipio de Tunja o quien haga sus veces para que dentro de un término preciso ejecute los estudios previos para el diseño de un proyecto estructural de mantenimiento, adecuación, remodelación y reactivación de escenario Teatro Cultural de Tunja a través del cual se superen la totalidad de los deterioros, falta de mantenimiento y daños que ostenta en pisos, paredes, baños, escenarios culturales, espacios administrativos, pasillos, silletería, techos, sistemas de iluminación, camerinos, telón de seguridad, escaleras, entre otros que padece el bien.*
- 3. Ordene al Representante Legal del Municipio de Tunja o quien haga sus veces para que dentro de un término preciso ejecute los estudios técnicos especializados que se requieran para la ejecución del proyecto estructural de mantenimiento, adecuación, remodelación y reactivación de escenario Teatro Cultural de Tunja a través del cual se superen la totalidad de los deterioros, falta de mantenimiento y daños que ostenta en pisos, paredes, baños, escenarios culturales, espacios administrativos, pasillos, silletería, techos, sistemas de iluminación, camerinos, telón de seguridad, escaleras, entre otros que padece el bien.*

¹ “ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. (...)”

² “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.”

³ “ARTÍCULO 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos. (...)”



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA
DESPACHO

Expediente: 2020-00157

4. Ordene al Representante Legal del Municipio de Tunja o quien haga sus veces para que dentro de un término preciso asigne o gestione los recursos para la financiación de los estudios previos y de los estudios técnicos especializados que se requieran para la ejecución del proyecto estructural de mantenimiento, adecuación, remodelación y reactivación de escenario Teatro Cultural de Tunja a través del cual se superen la totalidad de los deterioros, falta de mantenimiento y daños que ostenta en pisos, paredes, baños, escenarios culturales, espacios administrativos, pasillos, silletería, techos, sistemas de iluminación, camerinos, telón de seguridad, escaleras, entre otros que padece el bien.

5. Ordene al Representante Legal del Municipio de Tunja o quien haga sus veces para que dentro de un término preciso asigne o gestione los recursos o la suscripción de convenios interadministrativos para la financiación del proyecto estructural de mantenimiento, adecuación, remodelación y reactivación de escenario Teatro Cultural de Tunja a través del cual se superen la totalidad de los deterioros, falta de mantenimiento y daños que ostenta en pisos, paredes, baños, escenarios culturales, espacios administrativos, pasillos, silletería, techos, sistemas de iluminación, camerinos, telón de seguridad, escaleras, entre otros que padece el bien.

6. Ordene al Representante Legal del Municipio de Tunja o quien haga sus veces para que dentro de un término preciso ejecute la totalidad de las obras que se contemplen en el proyecto estructural de mantenimiento, adecuación, remodelación y reactivación de escenario Teatro Cultural de Tunja a través del cual se superen la totalidad de los deterioros, falta de mantenimiento y daños que ostenta en pisos, paredes, baños, escenarios culturales, espacios administrativos, pasillos, silletería, techos, sistemas de iluminación, camerinos, telón de seguridad, escaleras, entre otros que padece el bien.
(...)"

Y se buscan otras declaraciones y condenas.

De la competencia.

Este Despacho es competente de conformidad con lo preceptuado en los artículos 15 y 16⁴ de la Ley 472 de 1998 y el artículo 155, numeral 10⁵, del C.P.A.C.A., en tanto para este asunto se determina que la parte accionada, MUNICIPIO DE TUNJA, es una autoridad pública de orden municipal cuyo domicilio está ubicado en este circuito judicial y así mismo los hechos que sustentan la demanda suceden en la ciudad de Tunja.

Agotamiento de requisito de procedibilidad.

El artículo 161, numeral 4°, del C.P.A.C.A. indica que cuando se pretende la protección de derechos e intereses colectivos, como en el asunto, previo a la presentación de la demanda debe haberse efectuado la reclamación prevista en el artículo 144 de ese mismo texto normativo, que dispone:

⁴ "ARTICULO 15. JURISDICCION. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las Acciones Populares originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia.
En los demás casos, conocerá la jurisdicción ordinaria civil.

ARTICULO 16. COMPETENCIA. De las Acciones Populares conocerán en primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial al que pertenezca el Juez de primera instancia.

Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda."

⁵ "ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(...)

10. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local o las personas privadas que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas."



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA
DESPACHO

Expediente: 2020-00157

“ARTÍCULO 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. (...)

Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudir ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.”

Requisito de procedibilidad que en efecto acreditó haber agotado en debida forma la parte actora, pues previo a la presentación de la demanda elevó solicitud ante la autoridad accionada para que adoptara las medidas necesarias de protección de los derechos o intereses colectivos invocados en relación con la situación del Teatro Cultural de Tunja, medidas que concretó en la petición, previa contextualización de los hechos que fundamentaban la misma, e incluso precisó en el escrito que la solicitud era elevada con el objeto de agotar la reclamación previa del artículo 144 del C.P.A.C.A. (archivo 004 del expediente digital).

Ahora, frente a la reclamación en comento la administración municipal accionada, mediante comunicación 1.13-7-3-735 del 23 de octubre de 2020, emitió respuesta expresa (archivo 005 del expediente digital), indicando lo siguiente: “(...) **el inmueble no presenta afectaciones estructurales, por lo tanto, no requiere un proyecto estructural como lo indica el peticionario.** (...)”. Sin embargo, más adelante señaló:

*“(...) para determinar un plan de mantenimiento para el Teatro Cultural Fernando Soto Aparicio, me permito informar que **se realizará un comité intersectorial que permita determinar que acciones de intervención requiere el inmueble** a corto, mediano y largo plazo.*

PETICIÓN SEGUNDA: Referente a la presente petición, **se reitera al peticionario que en la visita técnica realizada se pudo determinar que no existe un daño estructural el inmueble. Ahora bien, se estará realizando un comité intersectorial que permita determinar las acciones que requiere el bien y la gestión para ejecutarlas.**

PETICIÓN TERCERA: **Se reitera que el inmueble no presenta afectación estructural. Sin embargo, debe indicarse que no se puede realizar estudios previos sin antes poder concertar y analizar intersectorialmente las actuaciones que se deben realizar en el bien patrimonial Teatro Cultural.**

PETICIÓN CUARTA: **Se reitera que el inmueble no presenta afectación estructural. Ahora bien, acogiendo el informe de visita técnica, se analizará en el comité intersectorial las acciones de mantenimiento que se requieren ejecutar, las cuales no requieren de estudios técnicos para llevarlas a cabo, solo sí el bien requiere restauración, que de acuerdo a la visita técnica en este momento no lo requiere.**

PETICIÓN QUINTA: Referente a la presente petición, me permito manifestar que hasta tanto no se lleve a cabo un análisis interno y definir el plan de mantenimiento, **no se podrá asignar los recursos.** Ahora bien, se reitera lo dispuesto en las anteriores peticiones donde se indica que los estudios técnicos no se dispondrán en este momento al considerar que el inmueble podrá ser intervenido a través de proceso de mantenimiento y reparaciones locativas, actividades que están contempladas en la normativa que regula el patrimonio cultural.

PETICIÓN SEXTA: Referente a la presente petición, se informa que **de acuerdo al plan de mantenimiento que requiera el teatro cultural, se definirá el camino de gestión de recursos para su ejecución.**

PETICIÓN SÉPTIMA: Referente a la presente petición, me permito manifestar que **el municipio de Tunja realizará de acuerdo a sus posibilidades la totalidad del plan**



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA
DESPACHO

Expediente: 2020-00157

de mantenimiento que se contemple en el bien inmueble, siendo este un espacio de importancia para el ente territorial.
(...)” (Negrilla fuera del texto original)

Como se ve la respuesta es contradictoria y no garantiza que la autoridad accionada realmente adoptará las medidas necesarias de protección de los derechos colectivos invocados en la demanda como presuntamente vulnerados. Al respecto, debe tenerse en cuenta que sobre la finalidad del requisito de procedibilidad en estudio el Consejo de Estado ha indicado:

“[...] Se advierte que al imponer esta obligación al Administrado, el legislador pretendió que la Administración sea el primer escenario donde se solicite la protección del derecho colectivo presuntamente violado, en aras a que, de ser posible, cese de manera inmediata la vulneración a tales derechos, (...).
(...)

El propósito perseguido por el legislador con esta exigencia, se repite, es el de proveer al ciudadano y a la propia administración de un escenario de diálogo que garantice la protección del derecho o interés colectivo sin necesidad de llegar a un proceso judicial, al tiempo que constituye un presupuesto de procedibilidad de la acción popular. En el informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley número 315 de 2010 cámara de representantes, 198 de 2009 senado “por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” que introdujo este requisito, se señaló al respecto:

“[...] En el artículo 144, relacionado con el medio de control para la protección de los derechos e intereses colectivos, a fin de que el interesado de la comunidad pueda obtener de la Administración dicha protección sin necesidad de acudir a un juicio y esta a su vez cuente con la oportunidad de analizar la situación de amenaza o vulneración de un derecho o interés colectivo y evitarla o conjurarla (...).”⁶(Negrilla y subraya fuera del texto original)

“(...) la motivación del legislador para la expedición de esta norma consistió en garantizar que las autoridades competentes, sin la intervención de la jurisdicción contencioso administrativa, lleven a cabo las acciones dirigidas a cesar la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos.”⁷ (Negrilla y subraya fuera del texto original)

Conforme a lo anterior, la finalidad del requisito de procedibilidad del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos (acción popular), más que evitar el proceso judicial, es que la administración realmente adopte medidas para conjurar la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos, lo que como ya se indicó no sucede en el *sub examine*.

Ahora, es de destacar que en un caso de similares contornos fácticos al presente, particularmente en lo concerniente al requisito de procedibilidad, el Órgano de Cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo explicó:

⁶ CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Sentencia del doce (12) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), Radicación número: 70001-23-33-000-2016-00217-01(AP), Actor: COMUNIDAD TOLUDEÑA Y DE COVEÑAS, ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TOLÚ (COOTRANSTOL), ASOCIACIÓN DE GUÍAS TURÍSTICOS DE COVEÑAS, COOPERATIVA TRANSPORTADORA TURÍSTICA DE TOLÚ (COOPTRANSTUR), COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VENDEDORES DE COMIDAS RÁPIDAS DE SANTIAGO DE TOLÚ, ASOCIACIÓN DE BICITAXISTAS DE TURISMO ECOLÓGICO DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, ASOCIACIÓN DE PESCADORES AFRODESCENDIENTES EMPRENDEDORES DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, COOPERATIVA MULTIACTIVA CAVERCOOP, Demandado: MINISTERIO DE TRANSPORTE, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – CONCESIÓN RUTA DEL MAR S.A.S.

⁷ CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Providencia del quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019), Radicación número: 25000-23-41-000-2019-00364-01(AP), Actor: JAIME PLATA RAMOS, Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA
DESPACHO

Expediente: 2020-00157

“(…) Ahora bien, es importante resaltar, por un lado, que la Secretaría de Obras Públicas del Municipio mencionó que, revisado el inventario de necesidades viales del Municipio, la obra se encontraba incluida y que su construcción se desarrollaría previo estudio técnico y de acuerdo a un orden de prioridades, advirtiendo que los recursos de la vigencia actual (2017) eran escasos. Por otro lado, la Alcaldía de Manizales – Unidad de Gestión del Riesgo manifestó que solicitaría la inclusión de la obra en el inventario de necesidades viales del Municipio.

La Sala considera, en este caso, que **las respuestas emitidas por la administración** permiten entender que el demandante cumplió el requisito de procedibilidad establecido en los artículos 144 y 160 de la Ley 1437 pues estas **no garantizan que las autoridades demandadas adoptarán medidas de protección de los derechos colectivos invocados en la demanda**. En primer orden, **la Sala destaca la contradicción entre las respuestas emitidas** por las autoridades encargadas de adoptar las medidas de protección, esto es: el Municipio de Manizales – Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Obras Públicas, pues mientras una afirma que la obra está incluida en el inventario de necesidades viales del Municipio, la otra señala que recomendará la inclusión de la misma. En segundo orden, porque **las respuestas no otorgan una verdadera garantía de protección del derecho colectivo presuntamente vulnerado o amenazado, si se tiene en cuenta que la administración pública no establece un plazo determinable para, al menos, iniciar el trámite que concluya con la construcción del andén y de la obra de estabilización del talud**. Tampoco se explican qué medidas o procedimiento se adoptarán para garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos. Por el contrario, la administración informa al actor que los recursos con que cuenta la administración “[...] son bastantes escasos para atender [...] la gran demanda de peticiones que se presentan [...]”; ello reafirma el **estado de incertidumbre en relación con las medidas a adoptar por parte de la administración, para proteger los derechos en este caso concreto**.

Por lo expuesto, la Sala considera que, **teniendo en cuenta que la respuesta de las autoridades públicas demandadas no otorgan una real garantía de protección de los derechos colectivos, la parte actora se encuentra habilitada para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y solicitar la protección de los derechos colectivos** objeto del presente medio de control.

(...)

La Sala revocará la decisión proferida el 23 de noviembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Caldas, teniendo en cuenta que **la respuesta al requerimiento de que tratan los artículos 144 y 160 de la Ley 1437 debe garantizar que los derechos sean real y efectivamente protegidos por la administración pública, por lo que no basta con reconocer la existencia de una amenaza o vulneración de los derechos, como en el caso bajo estudio, sino que debe garantizar que el derecho se protegerá dentro de un plazo y adoptando medidas precisas, que permita al actor popular realizar un seguimiento de las acciones afirmativas de la administración para garantizar su protección**.⁸ .⁹ (Negrilla y subraya fuera del texto original)

Así, aplicando el precedente vertical mencionado al acaso en estudio y teniendo en cuenta que en este, como ya se había esbozado, la respuesta de la entidad accionada fue contradictoria en cuanto al reconocimiento de la existencia de la amenaza o vulneración de los derechos colectivos y más importante que eso, no garantiza que estos sean realmente protegidos por la administración, en tanto no estableció un plazo concreto o determinable para el efecto y fue muy ambigua en cuanto a las medidas concretas a adelantar y así mismo tampoco aceptó las propuestas por la parte actora, se reafirma la incertidumbre o el

⁸ CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Providencia del diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00807-01(AP)A, Actor: DARIO RINCÓN NARANJO Y OTROS, Demandado: MUNICIPIO DE MANIZALES - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS.

⁹ CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Providencia del quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019), Radicación número: 25000-23-41-000-2019-00364-01(AP), Actor: JAIME PLATA RAMOS, Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA
DESPACHO

Expediente: 2020-00157

limbo en que se encuentra la protección de los derechos invocados colectivos en relación con la situación del Teatro Cultural de Tunja, lo que en términos de la sentencia acogida habilita a la parte actora para acceder a la administración de justicia.

Por lo expuesto, de encontrarse acreditados los demás requisitos de la demanda, se procederá a la admisión de la misma.

De la legitimación en la causa.

De la demanda se infiere la legitimación en la causa de la parte activa, por cuanto de conformidad con el artículo 12 de la Ley 472 de 1998, son titulares de la acción popular todas las personas naturales o jurídicas.

De otro lado, el MUNICIPIO DE TUNJA, es la autoridad pública presuntamente responsable de la amenazando o vulnerando los derechos colectivos invocados¹⁰, como propietaria del inmueble objeto de la acción popular, conforme lo reconoció en comunicación 1.13-7-3-735 del 23 de octubre de 2020, numeral noveno (archivo 005 del expediente digital).

De los demás requisitos de la demanda.

Por lo demás, se observa que el escrito de demanda reúne los requisitos de forma previstos en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998 y en el artículo 162 del C.P.A.C.A., pues el accionante se identificó plenamente, indicó los derechos o intereses colectivos amenazados o vulnerados, los hechos en que se funda lo anterior, las pretensiones, la autoridad pública presuntamente responsable, las pruebas que pretende hacer valer y las direcciones de notificación (archivo 003 del expediente digital).

De los requisitos del Decreto 806 de 2020.

Observa el despacho que la demanda del presente medio de control se instauró con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, norma que en su artículo sexto estableció lo siguiente, precisamente sobre la demanda:

“ARTICULO 6. Demanda. La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda.

Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya lugar a este.

(...)

En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la

¹⁰ Ley 472 de 1998: *“ARTICULO 14. PERSONAS CONTRA QUIENES SE DIRIGE LA ACCION. La Acción Popular se dirigirá contra el particular, persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que amenaza, viola o ha violado el derecho o interés colectivo. En caso de existir la vulneración o amenaza y se desconozcan los responsables, corresponderá al juez determinarlos.”*



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA
DESPACHO

Expediente: 2020-00157

demanda. De no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.” (Negrilla fuera del texto original).

Norma que fue acatada a cabalidad por la parte demandante pues: **i)** en el escrito introductorio se observa el canal digital, donde deben ser notificadas las partes (pág. 12 del archivo 003 del expediente digital), **ii)** se aportaron los anexos en medio electrónico y estos corresponden a los enunciados en la demanda, particularmente las pruebas (pág. 9 a 10 del archivo 003 y archivos 004 a 007 del expediente digital) y **iii)** se acreditó el envío de la demanda y sus anexos al correo institucional de reparto y simultáneamente a la entidad demanda (archivo 002 del expediente digital).

De la admisión de la demanda.

Conforme a lo expuesto la demanda en estudio reúne los requisitos legales para su admisión, en consecuencia, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja,

RESUELVE

ADMÍTESE la demanda de *PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS* (acción popular), instaurada por el ciudadano YESID FIGUEROA GARCÍA en contra del MUNICIPIO DE TUNJA, por las razones expuestas en la parte motiva.

En consecuencia, se dispone:

- 1. Tramítese** por el procedimiento previsto en el Título II de la Ley 472 de 1998.
- 2. Notifíquese** personalmente al MUNICIPIO DE TUNJA, a través de su Representante Legal, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 472 de 1998 y en los términos del artículo artículo 8 del Decreto 806 de 04 de junio de 2020, esto es, **con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica:** jurídica@tunja.gov.co. En el mensaje de texto que se le envíe a la entidad demandada, se le indicará expresamente que de conformidad con los artículos 9 numeral 152 y 61 numeral 33 de la Ley 1437 de 2011, deberán acusar recibo del envío del mensaje de datos contentivo de la notificación personal (art. 199 C.P.A.C.A.), so pena de que se aplique el art. 14, literal c) del Acuerdo PSAA06-3334 que manifiesta: “*RECEPCIÓN DE LOS MENSAJES DE DATOS. Los mensajes de datos se entienden recibidos de la siguiente manera: (...) c. Cuando los actos de comunicación procesal emanados de la autoridad judicial, no han sido devueltos al sistema de información de la autoridad judicial, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su remisión*”. Para lo antes expuesto deberán habilitar su correo electrónico con el fin de que el acuso de recibo se genere automáticamente o realizarlo en forma individual.
- 3. Notifíquese** personalmente a la señora Agente del Ministerio Público delegada ante este despacho, haciéndole entrega de copia de la demanda, sus anexos y del auto admisorio, de conformidad con lo previsto por el artículo 8 del Decreto 806 de 04 de junio de 2020.
- 4. Notifíquese** sobre el inicio de esta acción popular al Defensor del Pueblo, haciéndole entrega de copia de la demanda, sus anexos y del auto admisorio, para los efectos indicados en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. Para efectos de la notificación, dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020.
- 5. La parte actora deberá realizar la NOTIFICACION PERSONAL** del contenido de esta providencia al (los) demandado (s), a la señora Agente del Ministerio Público



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA
DESPACHO

Expediente: 2020-00157

delegada ante este despacho y al Defensor del Pueblo, para lo cual deberá enviar copia del presente auto, la demanda y sus anexos¹¹ al correo electrónico de la (s) entidad (es) demandada (s), del Ministerio Público y del Defensor del Pueblo, en el término de dos (2) días contados a partir de la notificación del presente auto por estado, de lo cual deberá informar al despacho, acreditando uno a uno los documentos remitidos (Reenvío con destino al correo institucional de este despacho del correo electrónico enviado a la (s) parte (s)).

6. Cumplido lo anterior y vencidos los veinticinco (25) días¹² a que se refiere el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del C. G. P., córrase traslado por el término legal de diez (10) días, conforme lo señala el artículo 22 de la Ley 472 de 1998, a fin que parte accionada conteste la demanda y solicite la práctica de pruebas que estime necesarias, con la advertencia que **las excepciones serán las que consagra el artículo 23 de la Ley 472 de 1998**. Igualmente, téngase en cuenta que al contestar la demanda la parte debe hacer un pronunciamiento claro y preciso frente a las pretensiones y cada uno de los hechos, además de exponer la fundamentación fáctica y jurídica de la defensa, tal como lo señalan los numerales 2º y 6º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, junto con los demás requisitos señalados en dicha norma.
7. Mediante el empleo de cualquier medio masivo de comunicación, **el actor popular informará a la comunidad** sobre la admisión de la demanda, y allegará al expediente los documentos que den cuenta de ello. De la misma forma se publicará un aviso secretarial sobre la existencia del proceso a la comunidad en el respectivo link de la página web de la Rama Judicial, en el ícono destinado para tal fin.
8. INFORMAR a la parte dentro del medio de control de la referencia, los canales de atención virtuales dispuestos por este despacho, en atención a lo regulado por el Consejo Superior de la Judicatura y Consejo Seccional de Boyacá y Casanare, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, artículo 3, los cuales son los siguientes:
 - Para el reparto de demandas: ofrepjadmintun@cendoj.ramajudicial.gov.co
 - Para la recepción de memoriales en acciones constitucionales: corresaconjadmtun@cendoj.ramajudicial.gov.co
 - Correo Institucional del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja: j09admintun@cendoj.ramajudicial.gov.co, en donde solo se recibirán las solicitudes de agentamiento de citas para ser atendidos personalmente en el despacho judicial dentro del horario de 8:00 am y 12:00 pm., salvo lo dispuesto en el numeral 5º.
9. De conformidad con lo dispuesto en el art. 201 de la Ley 1437 de 2011, por secretaría envíese correo electrónico a la parte demandante, que informe acerca de la publicación del estado en la página web de la Rama Judicial.

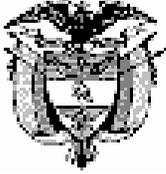
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROSA MILENA ROBLES ESPINOSA
JUEZA

Firmado Por:

¹¹ En caso que estos dos (2) últimos documentos hayan sido enviados previamente, no será necesario su reenvío con el auto admisorio.

¹² Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de Unificación Jurisprudencial, Expediente No. 25000-23-42-000-2017-03843-01(AC) de 8 de marzo de 2018, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López.



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA
DESPACHO

Expediente: 2020-00157

ROSA MILENA ROBLES ESPINOSA
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 009 ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE TUNJA-
BOYACA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

27123b3a28355cf3ec753236626fd67bde0e6bab1bfad23ab5e661c48200cd6d

Documento generado en 20/11/2020 03:43:36 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>